Artículo 27.3

Prescripción Séptima.

Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley,
con respeto a la voluntad de los ejidatarios y
comuneros
para adoptar las condiciones que más les
convengan
en el aprovechamiento de sus recursos
productivos,
regulará el ejercicio de los derechos de los
comuneros sobre la tierra
y de cada ejidatario sobre su parcela.

Asimismo establecerá los procedimientos por los
cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse
entre sí,
con el Estado o con terceros
y otorgar el uso de sus tierras;
y, tratándose de ejidatarios,
transmitir sus derechos parcelarios entre los
miembros del núcleo de población; igualmente
fijará los requisitos y procedimientos

conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela.

En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales.

En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción **decimoquinta**.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale.

El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo

y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;

Prescripción Octava. Se declaran nulas:

Inciso a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en **contravención** a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas;

Inciso b) Todas las concesiones:
composiciones o ventas de tierras, aguas y
montes,
hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda
o cualquiera otra autoridad federal, desde el día
primero de diciembre de 1876, hasta la fecha,
con las cuales se hayan invadido y ocupado
ilegalmente los ejidos,
terrenos de común repartimiento
o cualquiera otra clase, pertenecientes a los
pueblos, rancherías,
congregaciones o comunidades,
y núcleos de población.

Inciso c) Todas las diligencias de apeo o deslinde,
transacciones, enajenaciones o remates
practicados durante el período de tiempo a que se
refiere la fracción anterior,
por compañías, jueces u otras autoridades de los
Estados o de la Federación,
con los cuales se hayan invadido u ocupado
ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos,

terrenos de común repartimiento,
o de cualquiera otra clase,
pertenecientes a núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior,
únicamente las tierras
que hubieren sido tituladas
en los repartimientos hechos
con apego a la **Ley de 25 de junio de 1856**
y poseídas en nombre propio
a título de dominio por más de 10 años cuando su
superficie
no exceda de 50 hectáreas.

Prescripción Novena. La división o reparto
que se hubiere hecho con apariencia de legítima
entre los vecinos de algún núcleo de población
y en la que haya habido error o vicio,
podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las
tres cuartas partes de los vecinos
que estén en posesión de una cuarta parte de los
terrenos, materia de la división,
o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando

estén en posesión
de las tres cuartas partes de los terrenos.

**Prescripción décima a décimo cuarta se
derogan**

Prescripción decimoquinta. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal,
por cuatro de **agostadero** de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.

Se considerará, asimismo,
como pequeña propiedad,
la superficie que no exceda por individuo
de ciento cincuenta hectáreas
cuando las tierras se dediquen al cultivo de
algodón, si reciben riego;
y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del
plátano, caña de azúcar, café,
henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla,
cacao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad ganadera
la que no exceda por individuo
la superficie necesaria para mantener
hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su
equivalente en ganado menor,
en los términos que fije la ley,
de acuerdo con la capacidad forrajera de los
terrenos.

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras

y éstas se destinen a usos agrícolas,
la superficie utilizada para este fin
no podrá exceder, según el caso,
los límites a que se refieren los párrafos segundo
y tercero de esta fracción
que **correspondan** a la calidad que hubieren
tenido dichas tierras antes de la mejora;

Prescripción decimosexta se deroga.